EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL CHILENO: DESDE LAS CALLES AL CONGRESO NACIONAL

ROCÍO ZEPEDA MAJMUDI

Fin al lucro y una educación gratuita y de calidad » fue la consigna que logró que miles de personas salieran a la calle a protestar por algo que se creía justo y acorde a la realidad nacional. Si bien en la historia de Chile «no hay ningún capítulo importante en que los movimientos sociales no hayan participado activamente como oponentes o como impulsores de reformas políticas, de mejoras en sus condiciones de vida o de proyectos de transformación social de mayor alcance» (Garcés: 2012), el movimiento estudiantil se comporta como un caso especial debido a la transversalidad que logró y por tanto los grandes índices de apoyo obtenidos que desembocaron en su inminente institucionalidad.

Salir a las calles a exigir un derecho ciudadano y lograr que la población casi por completo se comprometiera por una causa específica, en este caso, no fueron algo espontáneo sino un constructo derivado de las desigualdades que impuso el régimen militar en Chile por medio de la instauración del modelo económico neoliberal que fue aceptado durante veinte años de gobiernos de la Concertación, asimismo, respaldada por el rol que los estudiantes chilenos han tenido a lo largo de la historia en los grandes procesos de cambios vividos por el país.

Sin embargo, que los estudiantes chilenos salgan a las calles y se involucren directamente en los procesos políticos en Chile, contrario a lo que se pueda pensar, no es algo nuevo. Sus primeras apariciones se remontan a principios del siglo XX y se desarrollan activamente hasta la actualidad.

¹ Rocío Zepeda Majmud, <u>rzepedamajmud@gmail.com</u>, Candidata a Doctor en Ciencia Política, Profesora Universidad Central de Chile.

1. Los antecedentes del movimiento

En el año 1918 se comenzaba en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la Reforma Universitaria, acción que se presenta como modelo para los movimientos estudiantiles del mundo sin ser Chile la excepción. Por aquellos años los estudiantes chilenos ya organizados desde 1906 por medio de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH, actualmente nombre que recibe la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile) comienzan a configurar los principios de la Reforma Universitaria en Chile adhiriendo principalmente a temas de desigualdad social en pos de una mejor calidad de vida para el obrero – campesino y posicionándose como actor de cambio por medio de manifestaciones masivas y públicas en contra de los gobiernos de turno.

Para el año 1927, en la dictadura del General Carlos Ibáñez del Campo, se concede por medio de decretos la autonomía financiera e institucional de la Universidad de Chile. Empero éste hecho que podría parecer de suma relevancia no se logra materializar en la práctica, lo que posiciona al cuerpo estudiantil como férreo opositor del General, configurándose de esta forma como actor central en el derrocamiento del régimen de facto de aquellos años. Con una bandera de lucha clara los estudiantes siguieron movilizándose hasta lograr su objetivo, es así como en el gobierno siguiente, de Juan Esteban Montero, la autonomía financiera e institucional se logra materializar en la Universidad de Chile y comienza a ser instaurada de manera paulatina en todas las universidades estatales del país. En los años venideros las demandas estudiantiles se centrarían en mejorar el modelo autónomo requerido por los estudiantes hasta el año 1944 cuando al conseguir sus demandas entran en un periodo de ostracismo que no se romperá sino hasta el año 1957 cuando salen a la calle nuevamente a protestar en contra de las alzas monetarias instauradas por el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo.

La participación estudiantil en los procesos políticos durante este periodo configura la renovación del involucramiento de los mismos en el escenario nacional. Esta re-aparición tiene su punto más álgido en el Movimiento de Reforma Universitaria del año 1967. Si bien podría creerse que dicho movimiento fue resultado de la contingencia nacional, al estudiarlo más a fondo se puede percatar que el proceso subversivo fue el resultado final de las movilizaciones de los años veinte del mismo siglo, debido a que sus demandas centrales consistían en el perfeccionamiento de aquellas mismas peticiones que fueron causantes de las movilizaciones pasadas. La frustración de no conseguir completa autonomía universitaria y de no posicionar al estudiante chileno como actor central en los procesos de cambios sociales que Chile necesitaba ocasionaron una ola de manifestaciones sucesivas que tuvieron su inicio el 15 de junio de 1967 en la Universidad Católica de Valparaíso por medio de la toma de la Escuela de Arquitectura, la cual contó con el apoyo del cuerpo docente de dicha universidad, planteando: la solicitud de un cogobierno; una «universidad abierta» y; la elección del decano por el cuerpo docente y no por jerarquía católica. A los pocos días todas las demandas son concretadas lo que da pie a que otras universidades comenzaran a realizar acciones similares. Es así como se levantan la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Técnica del Estado, la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción.

El Movimiento de Reforma Universitaria logra conseguir sus objetivos y al igual que el movimiento actual se logra institucionalizar por medio de la creación por parte de sus líderes de organizaciones izquierdistas que estuvieron presentes en el sistema de partidos hasta la época contemporánea: el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU) vigente hasta 1994 y la Izquierda Cristiana (IC) que se perpetúa hasta la actualidad por medio de la Izquierda Ciudadana.

Durante la dictadura militar (1973 – 1990) se comienza la intervención de las instituciones de educación superior, así también se detienen masivamente a estudiantes, académicos y funcionarios involucrados en organizaciones contrarias al régimen. De esta forma, la derrota de la izquierda chilena y por consiguiente de los movimientos sociales fue una jugada estratégica ya que dichos movimientos quedan sin capacidad de acción sobre el Estado y con débiles capacidades de autodefensa (Garcés: 2012), por lo que más importante que protestar era la propia sobrevivencia.

La intervención del Estado en los órganos educativos fue el primer paso hacia la reestructuración del sistema educativo chileno, una contra reforma que tenía como uno de sus objetivos limitar la participación estudiantil en los asuntos internos del gobierno. Lo que logró la intervención fue condicionar la reacción estudiantil, limitar sus espacios de participación instaurando una política del terror basada en la prisión política, desaparición o tortura de aquellos que osaran traspasar su rol para intervenir en temas políticos.

La contra reforma de la dictadura de Augusto Pinochet buscaba un rediseño institucional basado en primera instancia en el fin del cogobierno y la autonomía universitaria –bastión de lucha del movimiento estudiantil durante medio siglo—, ya que, bajo la óptica del gobierno, estas instancias permitían a los estudiantes marxistas inferir en el proceso de toma de decisiones, rol que a ellos no les correspondía y que escapaba a su única obligación: estudiar. Pinochet consideraba que la gratuidad en la educación superior fomentaba el activismo, por lo que la mejor forma de terminar con las revueltas estructurales de los estudiantes era terminar con la gratuidad en la educación. Como él mismo afirmó: «Si la educación es pagada, los jóvenes se dedicarán más a sus estudios» (El Mercurio: 1980).

Este nuevo proyecto educacional se materializa por medio de la promulgación de la Ley General de Universidades en el año 1981, la actual actuó por medio de la fragmentación de las universidades a fin de descentralizar la gestión universitaria y así desarmar la acción común del movimiento estudiantil. De esta forma las grandes universidades fueron segmentadas en pequeñas universidades regionales. En suma a esto, se decretó el fin de los aranceles diferenciados que permitían a los estudiantes acceder gratuitamente a la educación superior y se respalda la creación de universidades privadas, dando paso a la aceptación por pate del gobierno del lucro en la educación.

El modelo que plantea a la educación como un bien de consumo se consolida bajo el amparo de un sistema económico neoliberal, el cual no se encuentra con mayores opositores hasta el año 2001, cuando tímidamente se producen las primeras manifestaciones que sirvieron de antesala para su gran reaparición durante los años 2010-2011. El malestar que explota en estos

años se instala en vastos sectores sociales (Garcés: 2012) luego de una acumulación constante de demandas incumplidas que trajeron el retorno a la democracia y que se cultivaron durante los veinte años de gobierno de la Concertación, durante el cual no se constituyeron movimientos sociales significativos. El movimiento del año 2001, bautizado como «El mochilazo» se orientó en la práctica principalmente a la petición de la gratuidad del transporte público durante todo el año para los estudiantes y pese a que no lograron su objetivo dicho episodio sirvió para la reorganización del movimiento estudiantil que volverá a resurgir con más fuerza durante el año 2006.

La ola de manifestaciones denominadas como la «Revolución Pingüina» –debido a que fueron encabezas por estudiantes secundarios cuyo uniforme es azul marino y blanco, similar a los colores del animal aludido– planteaba demandas a corto y mediano plazo que abarcaban desde las demandas solicitadas en el año 2001 hasta la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) promulgada por Augusto Pinochet durante el último día del régimen militar, el 7 de marzo de 1990. Con Michelle Bachelet a la cabeza de su primer gobierno los estudiantes se involucraron nuevamente de manera directa en el proceso de toma de decisiones y lograron la promulgación de una nueva Ley General de Enseñanza (LGE). Este punto marca de manera definitiva el antecedente más directo de la reconfiguración del movimiento estudiantil como actor político y social preponderante.

2. El movimiento estudiantil y su paso hacia la institucionalidad

Es así como en el año 2010 pudimos ver como miles de estudiantes, tanto escolares como universitarios y técnicos, tomaban las calles por medio de manifestaciones cargadas de color que en el transcurso de un año lograron volverse transversales y transformar la demanda por el fin al lucro y la educación gratuita y de calidad en una demanda social. El movimiento estudiantil chileno configura un cuadro social y político con dos componentes fundamentales: un gobierno que ensaya débiles estrategias de salidas al conflicto y que consideraba la educación como un bien de consumo en la que los privados cumplen un activo rol con sus debidos réditos siendo el Estado sólo un ente regulador de los negocios educativos y un movimiento social potente, el de los estudiantes, quienes recuperando viejas tradiciones nacionales referente a la educación, postulaban que ésta debía ser concebida como un derecho garantizado por el Estado (Garcés: 2012) y no por los privados.

La transversalidad del movimiento estudiantil empezó a hacerse evidente cuando comenzaron a recibir el apoyo de diversas organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, Organizaciones Católicas, Ambientalistas, el Pueblo Mapuche, el Gremio Artístico Chileno, el Colegio de Profesores, etc., reflejando en las encuestas hasta un 81,9% de apoyo a las demandas estudiantiles por parte de la ciudadanía, mientras que por otra parte el Gobierno descendía en sus índices de aprobación de manera constante, transformándose Sebastián Piñera, presidente de Chile desde 2010 hasta marzo de 2014, en el mandatario con mayor índice de rechazo histórico del país, un 23% (CEP: 2011). De esta forma el movimiento

estudiantil se constituye como un movimiento social ya que logra «incluir a las capas más significativas de la sociedad, como obreros, grupos de mujeres, estudiantes, jóvenes y al estamento intelectual» (Tilly: 2010) bajo un agravio común, que en este caso es la desigualdad y el acceso limitado a la educación superior.

Las acciones colectivas que llevaron a cabo el movimiento para posicionar su demanda abarcaron desde cacerolazos, ocupaciones ilegales de establecimientos gubernamentales, educacionales y partidarios, daños a la propiedad pública y privada, miles de detenidos por disturbios, cientos de heridos y al menos tres muertos, un plebiscito ciudadano con más de un millón de participantes a favor de la gratuidad y calidad en la educación y decenas de estudiantes huelgas de hambre hasta mesas de diálogo formales quebradas y la destitución de dos Ministros de Educación. Lo interesante resulta al pensar que dichas acciones colectivas nacen desde la sociedad civil y no desde grupos políticos partidarios específicos.

Cuando el movimiento estudiantil se reconfigura lo hace bajo figuras emblemáticas que fueron las encargadas de darle visibilidad a dicho movimiento. Camila Vallejos, Giorgio Jackson, Karol Cariola y Gabriel Boric constituyen la voz de una demanda social, ciudadana, de una reivindicación histórica que no tiene color ni respaldo político. Pese a que Vallejos y Cariola pertenecen al Partido Comunista de Chile, su rol dentro del movimiento no se relaciona ni se ve influenciado por las directivas del partido, esto se puede explicar debido a que las demandas del movimiento estudiantil al lograr transformarse en demandas sociales traspasan lo político partidario y se posicionan más allá del espectro político básico. Estos jóvenes más que funcionar en base a convicciones políticas partidarias funcionan en base a convicciones morales y en representación de miles que buscan un cambio real en la educación chilena.

Los jóvenes lograron poner en jaque la efectividad y eficiencia del Gobierno quien respondió mediante la criminalización del movimiento tratando a los manifestantes públicamente de intransigentes y violentistas, así como también, aumentando la represión hacia ellos con técnicas anti motines que son cuestionadas por las Organizaciones nacionales e internacionales pro Derechos Humanos. El resultado no fue otro que el crecimiento de la simpatía y popularidad del movimiento en desmedro del gobierno, quienes, producto del descontento social, se tuvieron que enfrentar a la diversificación de demandas que iban desde movilizaciones en Punta Arenas – comuna austral de Chile– por las alzas de precios en el gas y manifestaciones ecologistas por proyectos hidroeléctricos hasta la exigencia de igualdad de derechos por parte de las minorías sexuales.

Las consecuencias inmediatas del movimiento fueron por una parte el aumento del descontento social y por otra la institucionalización del mismo movimiento, institucionalización que se vio favorecida por los tiempos en los cuales se desenvolvieron dichas acciones. El hecho de haberse desarrollado poco antes de las elecciones presidenciales —en noviembre del 2013—obligó a las facciones políticas del país a desarrollar programas de gobierno en torno a las demandas estudiantiles y a incluir a las caras del movimiento dentro de las negociaciones y mesas programáticas de las diferentes campañas.

Fue Michelle Bachelet quien logró capitalizar las demandas ciudadanas consiguiendo aunar posturas con los representantes del movimiento estudiantil para conseguir su apoyo por medio de la entrega de garantías que aseguraban la elección de dichos rostros en la Cámara de Diputados de Chile. De ésta manera se consideró dentro del programa de gobierno de Bachelet la Reforma Educacional como tema central, la cual tendría como objeto terminar con el lucro y lograr la gratuidad y calidad de la educación, dicha reforma estaría acompañada por una Reforma Tributaria que entregaría los fondos necesarios para solventar los cambios requeridos en educación. En suma a esto la alianza de partidos que apoyaba a Bachelet, la Nueva Mayoría – todos partidos de izquierda—, acordó dejar plazas abiertas para que los voceros del movimiento estudiantil pudieran presentarse como candidatos para la cámara de diputados y ser electos sin problemas. La estrategia funcionó, Michelle Bachelet salió electa como Presidenta y logró la mayoría en ambas cámaras —condición necesaria para poder llevar a cabo las reformas—asimismo, cuatro de los cinco rostros del movimiento que se postularon salieron electos: Camila Vallejos, Karol Cariola, Giorgio Jackson y Gabriel Boric.

La institucionalización del movimiento estudiantil no se dio sólo por medio de la alianza con la Nueva Mayoría. Previo a las elecciones Giorgio Jackson (Ex Presidente de la Federación de estudiantes de la Universidad Católica, FEUC) junto con otros jóvenes fundan Revolución Democrática (RD) en enero del 2012. Movimiento que se constituye como una alternativa política para los que no comparten los preceptos políticos de los partidos tradicionales. Este grupo nace en respuesta a la crisis de representación por la cual atraviesa Chile.

Una vez que el movimiento estudiantil se institucionaliza se podría pensar que dicho movimiento se podría disolver para pasar a formar parte de las facciones políticas tradicionales, sin embargo en la práctica no ha sido así. Los jóvenes en el parlamento —los cuatro rostros del último movimiento más Vlado Mirosevic, Presidente del Partido Liberal de Chile— se han diferenciado de las prácticas políticas tradicionales por medio de acciones como la petición de un sueldo ético para los parlamentarios, proponiendo reducir a la mitad el sueldo que reciben ya que éste es cerca de 40 veces mayor que el sueldo mínimo en Chile, lo cual a su consideración es un agravio contra la ciudadanía chilena. Este pequeño acto, pese a que fue rechazado en pleno por ambas cámaras, demuestra que los jóvenes parlamentarios basan su accionar en reivindicaciones sociales con razones morales, más que en el interés propio, diferenciándose de la clase política chilena.

3. Reflexiones finales

Como pudimos ver, las demandas del movimiento estudiantil son producto del sistema impuesto por el régimen militar y del papel histórico que han tenido los estudiantes de Chile en los procesos de cambio del país. El estallido ciudadano que se inicia a principios del siglo XXI fue producto de una frase de absorción de como los llamó Salazar (2013) «diecisiete años de terrorismo militar (o 'revolución neoliberal'), seguidos de la larga marcha blanca de la Concertación (1990 – 2010)», que constituyeron un periodo global de tensión, observación y

deliberación de 37 a 40 años que tuvo como hecho decisivo para su desarrollo tal vez, el gobierno derechista de Sebastián Piñera (Salazar: 2013) quien por su mirada a la educación como bien de consumo sumada a la poca experiencia política de las facciones de derecha no supo enfrentar ni manejar el movimiento. De la misma manera su consecuente institucionalización fue el resultado natural frente a una crisis de representación que afecta hasta la actualidad al sistema de partidos chileno. La renovación de parte de la clase política era algo inminente y los mejores candidatos para ocupar este papel eran aquellos jóvenes que constituían la voz de la demanda social.

Si bien es cierto que la mayoría de los movimientos sociales en Chile no han llegado a ejercer por completo su «poder constituyente» (Salazar: 2013), el movimiento estudiantil por medio de la movilización de masas logra posicionar en la opinión pública y en la agenda política la temática de la educación sacándose el yugo de ser tratados como «subversivos» y resistiendo la opresión del gobierno.

De esta forma el movimiento estudiantil de Chile logró algo que ningún otro movimiento chileno había conseguido, esto es: la absoluta transversalidad. Esta transversalidad se logra por una alta visibilidad por medio del posicionamiento de sus rostros emblemáticos que desemboca en su inminente ingreso a la institucionalidad la cual pone en entredicho la representatividad de nuestros parlamentarios y da luces de fe para un futuro y la renovación de la clase política.

4. Referencias bibliográficas

CEP, (2011): Estudio nacional de Opinión Pública N°65 [en línea]. Diciembre 2011 [ref. de 7 de septiembre de 2013]. Disponible en Web: http://www.cepchile.cl

El Mercurio, edición del 28 de junio de 1980.

Garcés, M., (2012): El despertar de la sociedad. (Santiago, LOM)

Salazar, G., (2013): Movimientos sociales en Chile. (Santiago, Uqbar)

Tilly, C. Y Wood, L., (2009): Los movimientos sociales 1768 – 2004, desde sus orígenes a Facebook (Barcelona, Crítica).

Fecha de recepción: 01/07/2014. Fecha de evaluación: 15/08/2014. Fecha de publicación: 30/09/2014